

## Estados Unidos ante la migración

Jesús Velasco

Casi siete años atrás, en los albores de su campaña rumbo a la presidencia de México, Vicente Fox expresó de forma abierta y constante su preocupación por el tema de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. El entonces candidato del PAN señalaba con frecuencia la necesidad de encontrar una solución integral a los problemas emanados del complejo fenómeno migratorio. Ya durante el sexenio 2000-2006, el presidente Fox y sus dos secretarios de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda (2000-2003) y Luis Ernesto Derbez (2003-2006), colocaron a la migración en el centro de la política exterior mexicana. Por su parte, los ataques terroristas del 11-S redujeron aún más la receptividad de los funcionarios estadounidenses respecto al tema migratorio, en particular debido a la creciente securitización de la agenda nacional e internacional de la Unión Americana. Sin embargo, aunque no tuvieron un peso específico igual para autoridades mexicanas y estadounidenses en el lapso en el cual coincidieron las gestiones de Vicente Fox y George W. Bush, los asuntos migratorios no han dejado de significar una preocupación objetiva en ambos lados de la frontera.

En las últimas dos décadas, el ingreso de nuevos inmigrantes a territorio estadounidense ha alcanzado niveles sólo comparables con el de otras grandes olas de migración en la historia de la Unión Americana. Por ejemplo, a principios del decenio de 1990, en buena medida como consecuencia de la aprobación de la llamada Ley Simpson-Rodino (1986) que otorgó estatus legal a

millones de personas indocumentadas en Estados Unidos –la mayoría de origen mexicano–, ese país registró cifras sin precedente en lo referente a la entrada de inmigrantes. En 1990 llegaron 1 350 000 individuos, mientras que en 1991 lo hicieron 1 827 000, convirtiéndose éstos en los dos años con mayor número de ingresos de extranjeros en la historia estadounidense. Anteriormente, los flujos migratorios masivos de 1913 y 1914 –compuestos de manera primordial por balcánicos, griegos, polacos y rusos– habían sumado 1 197 892 y 1 218 480 entradas, respectivamente. En aquel entonces, al igual que hoy, los inmigrantes fueron rechazados por grupos xenófobos, quienes consideraban a los extranjeros inmigrantes como miembros de una estirpe inferior a la de los fundadores de la nación estadounidense. No obstante, también en ambos momentos históricos ha habido voces que se alzaron en defensa de los expatriados.

Curiosamente, mientras la explosión migratoria mexicana posterior a 1986 se explica en parte por la promulgación de una ley, la ola inmigrante de la segunda década del siglo XX fue buen pretexto para la creación de una ley. Las protestas de los *restriccionistas* opuestos a la inmigración, las dificultades económicas en Estados Unidos durante la coyuntura de la Gran Guerra en Europa, además de los intereses políticos y económicos de la época, se conjugaron para dar vida a la Ley Johnson-Reed de 1924. Esta legislación establecía por primera ocasión cuotas de ingresos de extranjeros de acuerdo con su país de origen.

En la actualidad se estima que llegan a Estados Unidos, en promedio, un millón de personas al año. Además, según cifras del Departamento de Seguridad Interna, un promedio de medio millón de individuos cruzan anualmente la frontera desde México de manera ilegal. Sin embargo, en 2006, más de tres centenares de emigrantes murieron en distintas circunstancias al intentar pasar como ilegales a territorio estadounidense. Por otro lado, se calcula que entre 500 y 700 mil personas son deportadas en el mismo lapso de tiempo, aunque hoy el número de indocumentados ya podría superar los 10 millones. En suma, en ninguna parte del planeta se registra tan intenso y constante flujo de personas como en la línea limítrofe México-Estados Unidos.

Con esta realidad en mente, la administración Fox se empeñó en alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Desde los primeros días de gestión se establecieron estrechos contactos entre funcionarios mexicanos y estadouni-

denses, al mismo tiempo que el Congreso de nuestro país mantuvo permanente comunicación con su contraparte en Washington. Entonces, de inmediato, el gobierno mexicano puso en la mesa de discusión cinco temas centrales: 1) la legalización de los trabajadores mexicanos sin documento; 2) trabajar de manera conjunta por una frontera más segura; 3) incrementar el número de visas disponibles para mexicanos; 4) crear un programa de trabajadores temporales; 5) buscar el apoyo estadounidense e internacional para desarrollar económicamente las regiones expulsoras de emigrantes en México.

En aquellos primeros meses del gobierno de Vicente Fox, el también entrante mandatario George W. Bush vio con simpatía la idea de alcanzar un acuerdo migratorio amplio con México. La razón era simple: desde hace ya un par de décadas el Partido Republicano inició una intensa campaña para atraer el voto hispano a sus filas. Tradicionalmente, los hispanos favorecen al Partido Demócrata (se estima, *grosso modo*, que 70 por ciento de los hispanos votan demócrata, aunque este porcentaje depende de la región y del país de procedencia de sus ascendientes). En algún momento, los estrategas republicanos calcularon que a pesar de la usual apatía político-electoral de los hispanos, éstos podrían ser atraídos a su esfera al explotar el conservadurismo cultural característico de esta minoría. Por ello, desde su campaña a la Casa Blanca, Bush se reunió con el llamado *caucus* hispano en el Capitolio, nombró hispanos en su gabinete y hasta pronunció discursos en español.

Ahora, Fox ha concluido su mandato presidencial y, a pesar de la voluntad política tanto del guanajuatense como de Bush –al menos en ciertos momentos de su gestión–, todavía no se ha materializado ni una reforma integral a las leyes de inmigración estadounidenses, ni tampoco un acuerdo migratorio binacional. Las variables que explican esto son múltiples. No obstante, quizá la más importante sea la diversidad de posturas presentes en el debate migratorio en Estados Unidos. Así, es posible identificar cinco grandes grupos interesados en temas migratorios en la Unión Americana: conservadores culturales, empresarios, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de los emigrantes, el movimiento obrero organizado y los mismos ciudadanos hispanos.

Los conservadores culturales no constituyen un grupo homogéneo. Bajo este término se engloba a personas y organizaciones que, por diversas razones,

se oponen a la nueva inmigración. Este sector comprende desde simpatizantes de posturas de extrema derecha como los neonazis, la *American Border Patrol* –no confundir con la corporación oficial dependiente del Departamento de Seguridad Interna– y los miembros del proyecto *Minuteman* –patrullas civiles anti-inmigrantes–, hasta las visiones más moderadas como la de los renombrados académicos Arthur Schlesinger Jr. o Samuel P. Huntington. Los conservadores culturales se encuentran fundamentalmente concentrados dentro del Partido Republicano.

En segundo término, cabe especificar que la categoría de empresarios se refiere a aquellos empleadores de inmigrantes ilegales en los sectores agrícola, de servicios y de la construcción en Estados Unidos. Identificados mayormente con la derecha política –aunque se pueden hallar algunos allegados al Partido Demócrata–, los empresarios favorecen la inmigración debido a sus efectos de reducción en los costos de producción.

Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los emigrantes destacan por su diversidad. De un lado, la Iglesia católica y otras congregaciones religiosas tienen una visión enfocada primordialmente en los esfuerzos por reunificar familias desintegradas como consecuencia del fenómeno migratorio. En la arena laica, un número significativo de organizaciones no gubernamentales e individuos por su cuenta realizan labores de altruismo al apoyar económica y médicamente a aquellos indocumentados que, tras haber conseguido llegar a Estados Unidos con éxito a través de la agreste zona limítrofe con México, quedan en condiciones de salud deplorables. Este diverso grupo se encuentra fundamentalmente ubicado dentro del Partido Demócrata.

El movimiento obrero estadounidense históricamente ha estado en contra de la llegada de extranjeros debido a que, en su opinión, abaratan la mano de obra. Sin embargo, durante los últimos veinte años el sindicalismo ha cambiado de manera sustancial al favorecer la regularización de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Este interés responde a la proclividad de los hispanos a afiliarse a distintas agrupaciones vinculadas con el movimiento obrero. En este sentido es importante especificar que el sindicalismo sólo está a favor de la legalización y no de planes de regularización parcial, como un programa de trabajadores temporales. La razón fundamental de ello, según la lógica

de organismos como la AFL-CIO, es que un inmigrante huésped, al no tener papeles de ciudadanía, no puede afiliarse a sindicato alguno. El movimiento obrero es una de las clientelas políticas más influyentes del Partido Demócrata.

Finalmente, se ubica el grupo de los hispanos, quienes, al igual que el sindicalismo, sólo favorecen la legalización. Como ya se mencionó con anterioridad, esta minoría tiende a favorecer la opción demócrata, aunque según la coyuntura política y su país de origen, en ocasiones han dado su sufragio a los republicanos.

Al revisar cada uno de los cinco grandes sectores interesados en el fenómeno migratorio, es posible notar el complejo mosaico que forman y cómo sus intereses pueden chocar entre sí a pesar de oponerse o favorecer una u otra opción en lo referente a leyes de inmigración en Estados Unidos. También se matiza el simplista lugar común de colocar a los demócratas como incuestionables aliados de la causa de los indocumentados y a los republicanos como feroces enemigos de los ilegales. Estas agudas divisiones longitudinales y transversales en los distintos grupos y partidos políticos son factor primordial para complicar la concreción de una reforma migratoria integral. Ejemplo de esto es el poco eco que ha tenido la propuesta de un programa de trabajadores temporales enunciada por el presidente Bush en enero de 2004. Por un lado, el sector republicano más conservador considera inaceptable el plan, mientras algunos demócratas con estrechos lazos en el movimiento obrero tampoco lo ven con buenos ojos. En suma, todo este escenario interno en la política estadounidense constituye la verdadera causa de la parálisis en materia de inmigración y no otros acontecimientos como los atentados terroristas del 11-S. En varios momentos de la administración Fox, no faltaron autoridades que recurrieron a este argumento para al menos explicar la inoperancia de sus gestiones enfocadas en el fenómeno migratorio.

El presente número de *Istor* explora desde una perspectiva histórica la posición de algunos de los principales actores que actualmente participan en el debate migratorio. Nuestro objetivo principal es ofrecer al lector un análisis profundo, y a la vez de fácil comprensión, acerca del debate migratorio en Estados Unidos, con el fin de acabar con estereotipos sobre el tema. Esperamos, pues, mostrar en su real dimensión, las posiciones de los diversos grupos de interés que participan en el debate y la complejidad que encierra este tema.

El número comienza con una contribución de Jerónimo Cortina sobre la opinión pública estadounidense en relación con la migración. Cortina analiza cómo el origen de los extranjeros que arribaron a territorio estadounidense cambió a partir de la aprobación de la ley de 1965, la cual modificaba el sistema de cuotas establecido en 1924. A partir de entonces se comienza a acentuar la llegada de extranjeros provenientes de Asia y América Latina. Cortina destaca también cómo el público estadounidense mantiene una posición ambivalente de aceptación-rechazo ante el arribo de inmigrantes a Estados Unidos.

A continuación, María Rosa García presenta una perspectiva comparada de tres grupos de interés latinos frente a la migración: la League of United Latin American Citizens (LULAC), la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y el National Council of la Raza. En su ensayo, García desmonta el mito del poder político de las organizaciones latinas, mostrando que éste es limitado y sólo en ciertas coyunturas puede realmente incidir en el debate público y en el proceso de toma de decisiones en Washington. Asimismo, la autora presenta una evaluación del impacto de las multitudinarias marchas en defensa de los derechos de los emigrantes acaecidas el año pasado.

El siguiente texto, a cargo de Rogelio García, aborda la lucha de los emigrantes indocumentados y sus vínculos con la Iglesia católica estadounidense. García pone en perspectiva las marchas de los emigrantes en el 2006, señalando cómo éstas no fueron un hecho insólito en la historia estadounidense. Por el contrario, el ayer muestra constantes luchas de los indocumentados en esas tierras. Asimismo, García nos muestra los nexos existentes entre los inmigrantes y la Iglesia católica estadounidense, destacando cómo en algunos momentos la Iglesia ha promovido la desobediencia civil ante medidas anti-inmigracionistas.

Finalmente, yo estudio la posición de la extrema derecha y los conservadores ante el actual debate migratorio. Analizo cuatro casos, comenzando con la extrema derecha representada por la American Border Patrol, pasando por el conductor de CNN Lou Dobbs, seguido por la American for American Immigration Reform, hasta llegar a las posiciones más moderadas de Arthur M. Schlesinger. Centro mi análisis en el pensamiento más que en la acción de estas organizaciones o personas, destacando el impacto que pueden tener las posturas nativistas en el debate migratorio actual. ❧